LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

LEY DE ETICA PUBLICA

ARTICULO 1° : *Ámbito de aplicación:* la presente ley de ética publica sera aplicable al ejercicio de la función publica como conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, siendo de aplicación a todos los magistrados, funcionario del Estado Provincial y podrá ser aplicada subsidiariamente en los Municipios y comunas en tanto carezcan de Carta Orgánicas Municipal u Ordenanzas específicas que regulen la materia.

ARTICULO 2°: Se entenderá por función publica, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial y /o Municipal o Comunal y de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

ARTICULO 3°: *Deberes y pautas de comportamiento ético.* Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

- a) cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional y Provincial, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
- b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos y austeridad republicana;
- c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado Provincial y Municipal según proceda orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés publico sobre el particular;
- d) No recibir beneficio personal indebido vinculado a la realización retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
- e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés publico claramente lo exija;
- f) Proteger y conservar la propiedad del Estado Provincial y/o Municipal según corresponda y solo emplear sus bienes con los fines autorizados.

Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;

- g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado Provincial y/o Municipal según corresponda para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
- h) Observar en los procedimientos de contrataciones publicas en los que intervenga los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad;
- i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial;
- j) Abstenerse de realizar otras actividades que afecten u obstaculicen la asistencia regular a las tareas propias del cargo.

ARTICULO 4° *Observancia y Sanciones.* Los sujetos comprendidos en el artículo 1° deberán

observar como requisito inexcusable de permanencia en el cargo una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán susceptibles de ser sancionados por los procedimientos establecidos en el régimen específico de sus funciones.

ARTICULO 5° Sanciones. Las sanciones se graduarán conforme a la gravedad de los hechos, desde apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, hasta inhabilitación temporal o absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público electivo o no, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran ser aplicadas por vía judicial o de otro poder del Estado.

ARTICULO 6° Finalización de las actuaciones. El cese o renuncia al cargo de quien estuviera investigado, no hará cesar la continuidad de las actuaciones, las que se tramitarán hasta el dictado de la resolución definitiva.

ARTICULO 7° Regímenes de declaraciones juradas. Las personas comprendidas en el artículo 8° de la presente Ley, deberán presentar una Declaración Jurada patrimonial dentro de los 30 días de posesión efectiva del cargo.

Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.

ARTICULO 8° Estarán comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada:

- a) El Gobernador y Vice-gobernador de la Provincia;
- b) Los Senadores y Diputados Provinciales;
- c) Los Magistrados del Poder Judicial de la Provincia;
- d) Los funcionarios del Ministerio Público Provincial;
- e) El Defensor del Pueblo de la Provincia y los adjuntos del mismo;
- f) Los Ministros, secretarios y sub-secretarios del Poder Ejecutivo;
- g) El Fiscal de Estado, el Presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas, el Contador General de la Provincia, el Tesorero General de la Provincia, el Escribano Mayor de Gobierno, el Director General de Escuela, el Presidente y los Vocales del Consejo General de Educación y demás funcionarios que integran los organismos del control del Sector Público Provincial;
- h) Los Miembros del Consejo de la Magistratura;
- i) Los jefes y sub-jefes, directores, jefes y sub-jefes departamentales de la Policía de la Provincia, y demás personal policial con categoría no inferior a Comisario o de categoría inferior que se encontrare a cargo de Comisaria, Director y Sub-director del Servicio Penitenciario y jefes y sub-jefes de las Unidades Penales de la Provincia;
- j) Rector, o Delegado normalizador o interventor, decanos y secretarios de las facultades dependientes de la UADER;
- k) Los funcionarios con categoría o función no inferior a la de director o equivalente que presten servicios en la Administración Pública provincial o Municipal, según corresponda centralizada o descentralizada, en las entidades autárquicas, en las Obras sociales administradas por el Estado Provincial, en las Empresas del Estado Provincial o Municipal y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado Provincial o Municipal en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
- l) Todo funcionario público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del poder de policía;
- ll) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de Director o Gerente;
- m) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, en cargos políticos no inferior a la de director o equivalente;

- n) El personal que cumpla funciones en el Poder Judicial de la Provincia y sus Ministerios Públicos de la Provincia, con categoría no inferior a secretario o su equivalente;
- ñ) Todo funcionario público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones de compra de recepción de bienes participe en la adopción de decisiones de licitaciones o compras;
- o) Todo funcionario público encargado de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuere su naturaleza;
- p) Los funcionarios públicos que los Municipios y comunas determinen a través de sus disposiciones, sin perjuicio de que entre ellos deberán estar incluidos al menos al Presidente del Departamento Ejecutivo; el vice-intendente; los Secretarios del Departamento Ejecutivo, los concejales y miembros de las Comisiones Comunales.
- q) Los miembros del Directorio de la CASFEG

ARTICULO 9º: Carácter de las Declaraciones Juradas. Las declaraciones juradas de bienes se presentaran en sobre cerrado y lacrado, debiéndose seguir el siguiente procedimiento:

- a) la declaración jurada tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta en los siguientes casos:
 - 1) Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores.
 - 2) Por las autoridades de aplicación.
 - 3) Por decisión de juez competente.
- b) Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información patrimonial requerida. El nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia.
En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique:
 - 1) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante.
 - 2) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración;
 - 3) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará a dicho informe;
 - 4) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento de la prohibición que esta ley prevee para el caso de uso indebido de la declaración jurada y las sanciones previstas para quienes realicen dicho uso ilegal.

Las solicitudes presentadas también quedaran a disposición del público en el periodo durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas.

Los bienes descriptos en el artículo 10 deberán ser individualizados en la declaración jurada sintética mediante los dos primeros dígitos de tus títulos o números de cuentas y un código que especialmente deberá asignar la autoridad de aplicación.

ARTICULO 10º: La declaración jurada deberá contener una nomina de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallaran los que se indican a continuación :

- a) Bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dicho inmuebles;
- b) Bienes muebles registrables;
- c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000) deberá ser individualizado;
- d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias;
- e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales, o extranjeras, tenencia de dinero en efectivo en moneda o extranjera. En sobre cerrado y

lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de las cuentas corrientes, de caja de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posean. Dicho sobre será reservado y solo será entregado a requerimiento de la autoridad de aplicación o judicial;

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o en el ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;

h) Ingresos y egresos anuales derivado de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripto en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante el organismo tributario correspondiente y en el caso de los incisos a) b) c) y d) del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.

ARTICULO 11°: Remisión de las Declaraciones Juradas. Las declaraciones juradas deberán quedar depositadas en los respectivos organismos, los que deberán remitir dentro de los 30 días de recepcionadas, copia autenticada a la autoridad de aplicación.

ARTICULO 12°: Incumplimiento de la presentación. Las personas que no hubieren presentado su declaración jurada en el plazo estipulado, serán intimadas de modo fehaciente por la autoridad encargada de la recepción, para que lo realice en el plazo perentorio e improrrogable de 15 días. La falta de remisión dentro del plazo mencionado sin causa justificada será considerada falta grave del funcionario responsable del área, dando lugar a la sanción disciplinaria que correspondiere.

Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas del mismo modo y en el mismo plazo previsto en el párrafo anterior. Sino lo hicieren, no podrán ejercer nuevamente otro función pública sin perjuicio de las demás sanciones disciplinarias que resultaran procedentes.

ARTICULO 13: La persona que acceda a una declaración jurada de carácter público no podrá utilizarla para:

a) Cualquier propósito ilegal.

b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a lo medios de comunicación y noticias para la difusión del público en general;

c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo;

d) Efectuar de forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole.

Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa conforme a los montos que establezca la reglamentación de la presente, los que deberán ser actualizados periódicamente. La aplicación de dicha sanción será facultad exclusiva de la autoridad de aplicación. Las sanciones que se impongan por violaciones a lo dispuesto en éste artículo serán susceptibles de ser recurridas judicialmente ante los tribunales en lo contencioso administrativo.

La reglamentación deberá establecer el procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la comisión de la infracción prevista en éste artículo.

ARTICULO 14°: Antecedentes. Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no hubiere sido resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes profesionales y/o laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que pudieran plantearse.

ARTICULO 15°: Incompatibilidades y conflictos de intereses. Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

- a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado Provincial o Municipal, según corresponda o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
- b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado Provincial y/o Municipal donde desempeñe sus funciones;
- c) Intervenir desde la función en actos en los que tenga vinculación sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine, o cuando existiere un interés particular, laboral, económico o financiero.

ARTICULO 16°: Aquellos funcionarios que hubieran tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su participación y/o actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTICULO 17°: Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo precedente, regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público durante los dos años inmediatamente anteriores o posteriores respectivamente. Estas incompatibilidades se aplicaran sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

ARTICULO 18°: El listado de las declaraciones juradas de las personas obligadas a presentarlos, deberá ser publicado en el plazo de 90 días en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicho plazo empezará a computarse a partir del vencimiento del previsto en el artículo 11.

ARTICULO 19°: En el caso que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 15, deberá: renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo y abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a las cuales estuvo vinculada en los últimos 3 años o tenga participación societaria.

ARTICULO 20°: Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1 estén alcanzados por los supuestos de los artículos 15, 16 y 19, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratara del dictado de un acto administrativo, éste se encontrara viciado de nulidad absoluta.

Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por estos actos le ocasionen al Estado.

ARTICULO 21: Régimen de obsequios a funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios, gratificaciones, donaciones u otras prestaciones a título gratuito, sean de cosas, servicios o bienes con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbres diplomáticas, la autoridad de aplicación reglamentara su registración y en los casos como deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, a acción social y educación o al patrimonio histórico cultural si correspondiere.

ARTICULO 22: Prevención sumaria. A fin de investigar supuestos enriquecimientos injustificados en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones

juradas e incompatibilidades establecidas en esta ley, la autoridad de aplicación deberá realizar una prevención sumaria.

La investigación podrá promoverse por iniciativa de la autoridad de aplicación, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia.

La reglamentación deberá determinar el procedimiento, garantizando el derecho de defensa de quien fuere objeto de la investigación.

El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.

ARTICULO 23: Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria surgiere la presunción de la comisión de un delito, la autoridad de aplicación deberá poner de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes acumulados.

ARTICULO 24: Dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley, deberá dictarse la reglamentación atinente a la prevención sumaria contemplada en los artículos precedentes.

ARTICULO 25: Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación de esta ley: la oficina anticorrupción y las comisiones de asuntos constitucionales de ambas Cámaras Legislativas.

ARTICULO 26: Funciones. Las autoridades de aplicación tendrán las siguientes funciones:

a) recibir las denuncias de personas o entidades intermedias registradas legalmente respecto de conducta de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La autoridad remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar conforme la gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo y su tratamiento en un plazo perentorio;

b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes;

c) Redactar el proyecto de reglamento de Ética Pública, según los criterios y principios generales consagrados en esta ley, los antecedentes provinciales sobre la materia y el aporte de organismos especializados.

Dicha iniciativa deberá remitirse para su estudio y sanción a la Legislatura de la Provincia, debiendo ingresar por Cámara de Diputados como cámara de origen.

d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios obligados por ley y conservarlas hasta 10 años después del cese en la función;

e) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente;

f) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;

g) Proponer el dictado de normas o la puesta en vigencia de programas destinados a transformar en acciones positivas los principios consagrados en esta ley;

h) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella;

i) Requerir la colaboración de distintas dependencias del Estado Provincial y Municipal dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones;

j) Elegir sus propias autoridades y dictar su reglamento interno;

k) Elaborar un informe anual dando cuenta de sus labor, debiéndose asegurar su difusión;

l) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 13 de esta ley y aplicar la sanción prevista en éste último.

ARTICULO 27: Las autoridades de aplicación podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios de acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo a las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto que se considere violatorio de la Etica Publica.

ARTICULO 28: Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley y de sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas sean debidamente informadas, pudiendo proponer modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones del Estado.

La enseñanza de la Etica Publica se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.

ARTICULO 29: La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ellas, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

ARTICULO 30: De forma.

FUNDAMENTOS:

Esta iniciativa legal se compadece con lo previsto en el artículo 37 de la Constitución Provincial, el cual obliga a funcionarios y agentes de la administración pública de cada uno de los poderes del Estado, municipios y comunas, la observancia y el cumplimiento de sus funciones, de una conducta acorde a la ética pública como valor social constitutivo, que hace a la esencia del sistema republicano.

Corresponde consignar que, la Constitución Nacional ordenó al Congreso de la Nación la aprobación de una norma que regule el ejercicio de la ética pública en las funciones de gobierno. Es así como fue aprobada la Ley 25.188, actualmente vigente y que ha servido de fuente de inspiración del presente proyecto.

Una Ley de Ética Pública es, sin duda, una de las asignaturas pendientes que la Legislatura adeuda al Estado Provincial y Municipal. La Profundización de mecanismos de transparencia y austeridad republicana en la gestión de gobierno en todos los poderes del Estado, es una empresa que debe ser el producto consensuado de todas las fuerzas políticas, por cuanto la obtención de dicha norma, se plasmará en una mayor y creciente seguridad jurídica para los ciudadanos de esta Provincia.

Es de esa forma, como otras provincias han aprobado leyes de ética pública de idéntica naturaleza. Nuestro país ha sido parte en la celebración de tratados internacionales en orden a combatir la corrupción y procurar la prevalencia de la honestidad en la gestión gubernamental.

A diario, los individuos discurren sus vidas entre dilemas o encrucijadas éticas que van resolviendo, conforme a sus principios, creencias y valores en los cuales el Estado no puede intervenir por aquello del artículo 19 de la Constitución Nacional de: "... las acciones privadas de los hombres...quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados..."

Ahora bien, ese proceder, cuando trasciende la esfera de lo privado, es el Derecho Positivo, el encargado de regular esa conducta.

Vale decir que, aún cuando el sistema penal del ordenamiento jurídico Argentino tipifica comportamientos ilícitos, susceptibles de reproche punitivo, existen otros actos o hechos que, sin generar penas o sanciones, comportan conflictos de intereses entre lo público y lo privado, en donde en ocasiones, éste último no puede prevalecer por sobre el primero.

Del mismo modo, que nadie puede ser obligado a adherir a dogmas, ideologías y/o plexos axiológicos sociales y/o colectivos, tampoco será la sociedad y quienes la representen, los obligados a soportar un actuar indolente y desaprensivo.

No obstante ello, cabe destacar que la Ley 25.188 ha introducido modificaciones al Código Penal.

El prevaricato moral de quienes interactúan en la función pública debe ser evitado a través de preceptos que garanticen y procuren la defensa del interés del conjunto, fundamentalmente de los sectores desprotegidos y vulnerables.

"La corrupción y los corruptos son los verdaderos Anticristos de éste tiempo...", ha afirmado recientemente, su Santidad, el Papa Francisco.

Es por esa razón, que el deber ser del imperativo categórico kantiano, adquiere mayor significación en este tiempo plagado de inconductas.

La transparencia de los procedimientos administrativos debe ir acompañada de normas que permitan el acceso de los organismos de control y fundamentalmente de aquellos que, aseguren el derecho a la información pública como el baluarte desde donde se pueda monitorear y fiscalizar la evolución patrimonial de un funcionario o agente de la administración pública.

Quienes administran o disponen de fondos o bienes del Estado, tienen la obligación de hacer corresponder sus estípendios e ingresos por el ejercicio de dicha función, con sus estilos de vida, pudiendo y debiendo explicar el origen de todos y cada uno de los bienes que componen su patrimonio. En idéntico sentido, subsiste el deber de justificar los incrementos experimentados en

él, cuando conviven en una misma persona, funciones públicas y actividad privada.

Alguna vez el ex jefe del gobierno Español y dirigente del PSOE Felipe González, sostuvo: “al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades”.

La buena salud de las instituciones republicanas, merece de sus actores, conductas ejemplares donde sea eliminada toda clase de sospecha. Del mismo modo que la suspicacia en relación a incompatibilidades, incumplimientos y aceptación de obsequios sean acotadas y restringidas de forma taxativa.

La posibilidad y el derecho de cualquier ciudadano de acceder a las declaraciones juradas de todos los funcionarios, debe ser una garantía de su efectivo cumplimiento por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlas públicas.

La ética, conforme la entendían los griegos, era parte constitutiva e indisoluble de la política. Aristóteles en su obra “La Etica Nicomaco”, refiere a éste concepto y advierte que en las virtudes filosóficas, coexisten dos aspectos: el Dianoético, que refiere a la parte doctrinaria, materia de educación pedagógica y la Etica en si misma, que se perfecciona con la costumbre, el ejemplo y el actuar ético. E ilustra afirmando que: “...sé es constructor, construyendo casas, citarista, ejecutando la cítara...” del mismo modo que, se es justo, ejercitando la justicia, moderado, ejercitando la moderación... y concluye: “...los legisladores hacen buenos a los ciudadanos, haciéndoles adquirir ciertos hábitos y esta es la voluntad de todo legislador; pero los legisladores que no lo hacen bien, se equivocan gravemente y con esto se distingue la buena forma de gobierno de las malas...”

Por todas las razones precedentemente invocadas, corresponde que concluyamos esta propuesta legislativa, rindiéndole homenaje a quien alguna vez afirmara: “...no he participado de la idea que, en la vida, como en política se hace lo que se quiere o lo que se puede. En la vida, como en política, se hace lo que se debe y si lo que se quiere o lo que se puede hacer, es malo, entonces no se hace nada” (Leandro N. Alem).